



conflicto y geopolítica ancestral

• Florencia Yanniello •

bb

Hace poco se cumplió un año de la desaparición en manos del Estado argentino de Santiago Maldonado mientras participaba de un corte de ruta con la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen en la Patagonia. En el último tiempo se escucharon muchas cosas sobre los pueblos originarios y algunas menos sobre el extractivismo y otros conflictos que continúan y profundizan el deterioro de esas comunidades. Hablé con Flor, una amiga periodista experta en el tema, para que nos cuente mejor.

"Para poner mineras van a tener que pasar por encima de nosotros/as" sentencia María Luisa Hincapié, abuela mapuche integrante de la comunidad Fentren Kimun de Gualajaina, Chubut. Y es que para poder trazar un mapa de la geopolítica de los territorios, no podemos dejar de entender que la territorialidad, en relación con el extractivismo se dan en territorios habitados por comunidades de pueblos originarios. Hablamos de extractivismo cuando hacemos referencia a las distintas caras del despojo que impone este modelo de extracción de bienes naturales a gran escala.

Investigadores/as de distintas disciplinas han formulado la noción de conflicto socioambiental para referirse a un tipo particular de conflicto social relacionado con el daño a los bienes naturales, que también involucra a las comunidades directamente afectadas por los impactos derivados de un determinado proyecto. Estos conflictos tienen un mismo origen estructural: son consecuencia de la implementación del sistema económico de inspiración neoliberal, que en América Latina se profundizó con las dictaduras militares de las décadas de los 70 y 80. Además, tienen una matriz común: grandes emprendimientos contaminantes desembarcan en pequeños pueblos con la promesa de progreso, desarrollo y trabajo para la comunidad y, luego de un tiempo, lo que aparentemente ser la salvación económica para la región se convierte en enfermedades, saqueos y contaminación.

Esta fórmula es repetida a lo largo y a lo ancho del país: la expansión de la frontera agrícola y los monocultivos en la pampa húmeda y el litral; la megaminería en la cordillera, las centrales hidroeléctricas en la Mesopotamia y Patagonia y las mega industrias y el crecimiento indiscriminado de las ciudades en la zona centro. Estas políticas generan, además de contaminación, la expulsión de comunidades campesinas y pueblos originarios y la destrucción de las economías regionales. Estas son algunas de las consecuencias más visibles del sistema capitalista dependiente de la extracción intensiva en grandes volúmenes de bienes naturales con muy bajo procesamiento.

Cuerpo-territorio

Cuando se habla de poner el cuerpo, en los conflictos socioambientales es literal. Son muchos los territorios atravesados por problemáticas relacionadas con el extractivismo en los que comunidades indígenas y asambleas vecinales resisten al avance de mineras, pasteras, hidroeléctricas, centrales nucleares y demás expresiones de una misma matriz de desamollo.

El cuerpo se vuelve territorio y "los territorios tienen memoria", explica Moira Millán, de la comunidad mapuche Pillán Mahuza de Corcovado, Chubut, que desde hace más de una década resiste ante el intento reiterado de instalación del proyecto hidroeléctrico La Elena sobre el Río Corcovado-Carreleufú. La Elena amenaza con inundar 11.000 hectáreas de bosque nativo que alberga una gran diversidad de flora y fauna.

La comunidad Pillán Mahuza está emplazada en un lugar geopolíticamente estratégico porque es frontera "fronteras que levantaron el Estado chileno y el argentino, porque para la Nación Mapuche no en la zona hay grandes reservas de agua dulce, otro motivo de amenaza constante hacia el territorio de la comunidad. Además, sus integrantes entienden que la energía que producirían esas seis represas proyectadas no sería para satisfacer las necesidades regionales, sino para alimentar la megaminería.

El caso de Pillán Mahuza es uno entre muchos. La Patagonia está plagada de conflictos por megaempresas, muchos de los cuales son resistidos por las comunidades aledañas.

Otra situación emblemática es la de Esquel, ciudad chubutense que logró oponerse a la megaminería mediante un plebiscito en 2003, en el que más del 80% de la población le dijo no a la extracción de oro con cianuro. Este fue un hito fundamental de la lucha socioambiental regional. Otro antecedente importante fue el rechazo, en 1996, a un repositorio de residuos nucleares en la meseta de la provincia.

Recientemente, en 2017, la movilización contra la instalación de una central nuclear en Sierra Grande, Río Negro, produjo un nuevo triunfo de la comunidad. La lista sigue. El sur está en la mira de inversores y

teratenientes extranjeros y también es el centro de interés de un Estado que establece zonas de sacrificio para el bienestar de unos/as pocos/as.

Hace un siglo las tierras de la Patagonia se entregaban a granel en concesiones que formaron los grandes latifundios de hoy, expulsando a los pueblos originarios a las ciudades, bajo el lema de *civilización o barbarie* que aún hoy estructura la geopolítica estatal de territorio. Parece olvidarse que en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se reconoció la preexistencia de los pueblos originarios respecto del Estado Argentino.

Tal como plantea la historiadora Pilar Pérez en su artículo "De la conquista del desierto a los enfrentamientos fraguados en democracia" la actual distribución de las tierras públicas de la Argentina sigue siendo el escenario del conflicto y las recuperaciones territoriales indígenas vuelven visible el racismo que estructuró –y aún lo hace– el desarrollo del capitalismo en el sur argentino.

Resistencia activa

La grave situación que afronta el Pueblo Mapuche en la defensa de la vida y del territorio se agudizó con los hechos sucedidos en 2017: la muerte de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería Nacional en la Lof en Resistencia de Cushman (Chubut) y la de Rafael Nahuel en manos de la Prefectura Naval Argentina en la Lof Lafken Winkul Mapu en Bariloche (Río Negro). A estos hechos se les suman las reiteradas amenazas y allanamientos a las diferentes comunidades. La aplicación de estas políticas represivas selectivas se justifica a partir del discurso que señala al mapuche como terrorista o enemigo interno. Se trata de acciones que pretenden frenar la resistencia activa contra el extractivismo y los latifundios en la Patagonia, lucha comunal que ha logrado importantes victorias en la alianza estratégica entre el Pueblo Mapuche y la sociedad no mapuche.

Así, queda demostrado que el consenso a favor de la vida entre los pueblos es posible; las comunidades mapuches reivindican la plurinacionalidad de los territorios y el derecho a la libre determinación de las 36

naciones que cohabitan con el pueblo argentino. "Se ensañaron con el Pueblo Mapuche porque tenemos una gran capacidad de articulación y hemos frenado grandes emprendimientos. Esa unidad para el Estado es preocupante", enfatiza Moira Millán. En la misma línea su hermano Mauro Millán, lonko de la comunidad, agrega: "El Pueblo Mapuche jamás detuvo su lucha; la diferencia es que ahora nos quieren involucrar en una red de terrorismo a quienes luchamos por el territorio".

Si consideramos que los mapuches fueron de los últimos pueblos originarios invadidos y que la Patagonia era el único territorio que no había podido ser conquistado por los europeos –blanco de la invasión argentina–, podemos entender el trazado geopolítico estatal y la preocupación de los gobiernos por el rol de las comunidades originarias en los conflictos socioambientales actuales. "La convivencia con lo foiclorico no molesta, pero cuando nos paramos a defender el territorio se tensan las relaciones con los Estados", sentencia el lonko Mauro.

Las comunidades mapuches sostienen que los territorios tienen memoria y pueden reordenarse en su geopolítica ancestral: esto quiere decir que no necesariamente debe organizarse la tierra a partir de la definición limítrofe político-geográfica de los Estados, sino que puede pensarse a partir de ecosistemas. "La propia naturaleza ordena el territorio, por eso las culturas que viven en una determinada región tienen muchos elementos comunes", explica Moira. En ese sentido, podemos pensar que existen otras lógicas de organización del territorio y que no solo nos debe preocupar que la Patagonia esté en manos de grandes terratenientes extranjeros, también el Estado hace estragos: no olvidemos que a Rafael Nahuel lo mataron en territorio de Parques Nacionales, no en un latifundio de Benetton.

FLORENCIA YANNIELLO
Periodista y Licenciada en Comunicación Social, integrante del colectivo de comunicación ambiental *Tinta Verde* y de la editorial comunitaria *La Caracola*. Autora de los libros *Descolonizando la palabra: Los medios de comunicación del pueblo Mapuche en Puelmapu y Amazuela*, *Retazos y relatos hilvanados en azul*. Becaria doctoral en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente UNLP-CONICET.